

Claves

Notas del Escenario Político

14 de Octubre, 2014

Alcances del Caso Penta

El caso Penta surge por la investigación de un fraude tributario y deriva en la revelación de un modus operandi de financiamiento político y de campañas, por la emisión de boletas de honorarios sin un trabajo asociado a ellas. La crisis afecta principalmente a la UDI y a Andrés Velasco, pero es inevitable que tenga impacto sobre el conjunto de la clase política.

Casi 10 años después, se repite la dinámica del caso MOP-Gate vivida en el Gobierno Lagos, que surge por un conflicto laboral en la empresa Gate, que termina en la denuncia de un sistema de pagos de sobresueldos en el MOP. En esa ocasión se llegó a un acuerdo político para manejar y resolver esa crisis, donde Pablo Longueira tuvo un papel central. Sin embargo, la tentación o la idea de avanzar en una suerte de "vuelta de mano" se frustró rápidamente: los actores políticos advirtieron que el contexto político y cultural ya no es el mismo y que un diseño similar de salida sólo agravaría el cuadro.

Sin embargo, es inevitable un acuerdo respecto del financiamiento de la política, que supere los acuerdos que resultaron del debate sobre el particular en 2003, y también algún puente de diálogo Gobierno-Oposición para contener la crisis. La actual fase escaramuzas y el intento UDI de involucrar al Gobierno en la crisis cederán a ese escenario más probable.

Primero, los hechos básicos son los siguientes.

Comenzó con una investigación a funcionarios del SII que ingresaban al sistema y alteraba los montos de devolución del FUT a empresas. La investigación del SII llegó al jefe del SII Oriente Iván Álvarez, que ofrecía este "servicio" a empresas a través de contadores. Por estos hechos, Álvarez está ahora formalizado y se encuentra en prisión preventiva. En sus declaraciones habría explicado el sistema y afirmó haber trabajado con Hugo Bravo, ex director del Banco Penta, para cometer el fraude en dos de sus empresas, Inversiones y Asesorías Challico Ltda. y Administración e Inversiones Santa Serella Ltda. Por estos servicios, Bravo le habría pagado 4 millones de pesos que recibió del contador del Grupo Penta Marcos Castro.

Con estas informaciones, la Policía de Investigaciones comenzó las indagaciones en el Grupo Penta, pero no encontraron que estuvieran haciendo este fraude; sin embargo, se descubrió otro: el mal uso de boletas de honorarios a través de las cónyuges de los fundadores Carlos Délano y Carlos Lavín, para disminuir la base imponible por parte de diversas empresas del Grupo Penta. La denuncia del SII involucraría finalmente a Empresas Penta S.A., Inversiones Penta III Ltda., Inmobiliaria Duero Ltda. e Inversiones Perkita Ltda., además de las dos anteriormente mencionadas. La reducción de la base

imponible detectada alcanzaría hasta ahora los 2 mil millones de pesos.

Luego, Hugo Bravo, quien también resultó formalizado, declaró que figuras políticas estaban involucradas en el caso de las boletas a través de aportes para financiar sus campañas. Estas acusaciones apuntaron específicamente a los senadores Moreira (UDI) y Von Baer (UDI), los ex candidatos al Senado Golborne y Zalaquett (UDI) y al ex candidato presidencial Andrés Velasco.

Segundo, ¿qué limita la posibilidad de un acuerdo político? Básicamente por dos razones.

- En primer lugar, es necesario despejar un mito. El acuerdo entre el Gobierno Lagos y Longueira el año 2003 fue respecto de la crisis política generada por las denuncias, que llegaban directamente al Presidente de la República. Sin embargo, ese acuerdo no involucró la investigación del caso. De hecho, la Ministra Gloria Ana Chevesich dictó condenas, entre ellas al ex-Ministro Cruz.

El talento de Longueira y su fortaleza política fue que, en ese contexto, sacó a la UDI de la estrategia de llevar al Presidente Lagos a un juicio político o a un intento de destitución o renuncia, superando la crisis institucional del caso. Ello despejó el fantasma de que un Presidente socialista no podría de nuevo terminar su gobierno y, a su vez, la UDI ganó legitimidad como partido democrático.

El punto de situación hoy es que esta crisis afecta a la UDI y podría serlo respecto de otros líderes y partidos, pero no tiene el alcance de crisis institucional del 2003. Por eso, luego, es evidente que la UDI intenta llevar el caso hacia la campaña de la Presidenta Bachelet.

- En segundo lugar, el clima político y cultural de este 2014 es muy distinto al de 2003 respecto de las exigencias ciudadanas de transparencia y probidad. La mezcla de esta mayor "inteligencia ciudadana" con una red de medios tecnológicos que diseminan la información de manera masiva y en tiempo real ha generado un segmento activo de ciudadanos, que sin ser mayoritario, es más extendido que antaño y tiene mayor capacidad de incidencia. El margen de maniobra de los actores políticos y empresariales, para desarrollar maniobras de manejo de crisis, es en consecuencia, mucho menor.

Tercero, alternativas de solución política se van a generar, pero aquí hay varios problemas tácticos y de condiciones que lo hagan posible.

- En esta primera fase, como señalamos, la UDI buscará envolver al Gobierno Bachelet en la crisis y Velasco ha optado por acusar una maniobra política. Aunque en ese debate pierden legitimidad, la tendencia en estos casos es que esa desgastante discusión termina afectado a todos y luego se busca una salida. Lo que vamos a vivir por ahora es una intoxicación del debate político;
- El Gobierno Bachelet tiene la ventaja de la iniciativa política para una nueva ley de financiamiento de la actividad política, de los partidos y las campañas electorales.

Si aprovecha bien esa ventana de oportunidad, puede salir por arriba de esa "intoxicación" y definir los términos en los que se va a debatir la solución política. En esa línea, el Gobierno necesita contener la tentación de sus partidarios de extremar este debate y, en esa línea, la querrela del PS afecta el relato de "que las instituciones funcionen" con autonomía y sin presiones políticas;

- El principal problema de la UDI es que todavía no tiene un control de daños, esto es, aún no conoce el alcance de su problema de financiamiento irregular de campañas y es evidente que perdieron todo control respecto de las denuncias de Bravo. Esto es, las aristas judiciales no logran ser dimensionadas y no puede pretender rebatirlas o ahogarlas. En algún momento la UDI necesita separar las responsabilidades personales respecto del cuidado institucional de su partido.

En síntesis, cualquier espacio de solución política depende de cómo se estructure la iniciativa del Ejecutivo y de cómo la UDI y los demás actores afectados vayan aislando el factor judicial, para abrir opción a las reformas político-legislativos que este caso instala.